

Medellín, siete (7) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	EJECUTIVO GARANTÍA REAL
Radicado	05001 31 03 006 2007 00482 02
Demandante	COMERCIAL DE CAMBIOS LA ORQUIDEA LTDA
Demandada	CASA DE CAMBIOS UNIDAS S.A. AGENCIA MEDELLÍN
Juzgado origen	SEGUNDO CIVIL CIRCUITO EJECUCIÓN SENTENCIAS

Decide la Sala la apelación interpuesta frente al auto del 11 de julio de 2022, mediante el cual se modificó la liquidación de crédito presentada por la parte ejecutante.

1. ANTECEDENTES.

En el año 2007, el demandante formuló demanda ejecutiva, con base en una factura, pretendiendo el pago de \$115'000.000 como capital y los intereses moratorios a la tasa máxima legal; mediante auto del 2 de noviembre de 2007, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín inadmitió la demanda porque la pretensión moratoria no se sustentó fácticamente; el 23 de noviembre de la misma anualidad el Juzgado Sexto libró mandamiento tan solo por el capital adeudado porque, a su juicio, la respuesta del ejecutante no subsanó el defecto reprochado en la demanda en cuanto a los intereses de mora y, frente a ello, no se interpuso recurso alguno.

Mediante sentencia de primera instancia, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín, decidió cesar la ejecución, bajo la premisa de que el documento base de recaudo no cumplía con las características de un título valor al no corresponder a la venta de mercancías y carecía del plazo para cumplimiento de la obligación, lo cual fue reprochado por el ejecutante mediante alzada.

En sentencia de segunda instancia, fechada del 31 de mayo de 2011, la Sala Octava de Decisión del Tribunal Superior de Medellín, revocó la decisión de primera instancia, atribuyéndole la idoneidad al título, por lo que ordenó que se siguiera la ejecución en la forma dispuesta en el mandamiento de pago, practicar la liquidación del crédito y llevar a cabo el avalúo de los bienes.

Habiendo asumido conocimiento del proceso el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín, en virtud de los acuerdos PSAA09-6263 y PDAA096289, por memorial del 4 de agosto de agosto de 2011, el apoderado de la demandante insistió en el reconocimiento de los intereses moratorios, pues en la sentencia que resolvió la apelación no hubo pronunciamiento al respecto. Petición que fue negada por auto

del 5 de agosto de 2011, toda vez que, no había lugar a adicionar el mandamiento de pago, siendo que las sentencias de primera y segunda instancia se encontraban en firme.

El 18 de mayo del 2022, el ejecutante presentó memorial contentivo de una liquidación actualizada del crédito por un total de \$544'901.446,66, comprendido por los conceptos de capital adeudado en \$115'000.000,00 y saldo de intereses por \$429'901.446,66. Vencido el término de traslado, el Juzgado Segundo de Ejecución, mediante auto del 11 de julio de 2022, modificó la liquidación del crédito, dejando en pie solo el capital adeudado, esto es, por la suma de \$115'000.000, sin intereses. A su juicio, solo se libró mandamiento de pago sobre el capital, pero no por los intereses pedidos por el ejecutante.

2. LA IMPUGNACIÓN.

Mediante memorial del 14 de julio del 2022, el ejecutante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Para sustentar su discordia dijo que, aunque no se reconoció en la orden ejecutiva interés de mora, lo cierto es que la demandada ha incurrido en mora injustificada por más de quince años y no es justo que el demandante deje de percibir frutos de ese capital ni se reciba indexación y que no es necesario que se haya pactado intereses de mora para que el interés legal sea reconocido.

Añadió que en el presente caso es procedente el pago del interés legal por cumplirse las condiciones de los artículos 1617 y 2232 de la Codificación Civil y, en ese sentido, al capital adeudado se le debe sumar el interés legal consistente en el seis por ciento multiplicado por el tiempo que lleva pendiente de pago la obligación. Por último, pidió revocar la decisión apelada y fijar la liquidación en la suma de \$ 218'500.000.

Mediante auto del 6 de diciembre de 2022, el a quo decidió no reponer la providencia atacada. Consideró que el auto del 23 de noviembre de 2007 tan solo libró mandamiento por capital y que el demandante no puede pretender que se liquiden conceptos no contenidos allí, ni en la orden de seguir adelante la ejecución. Agregó que, aunque la obligación pudiese comportar intereses legales, estos no fueron solicitados en la demanda y por tanto no se reconocieron en las providencias mencionadas las cuales no fueron atacadas y que estando en firme no puede el fallador volver a remover una situación jurídica consolidada.

Concedida la alzada y vencido el término de traslado, el expediente electrónico fue remitido a esta judicatura para lo pertinente.

3. CONSIDERACIONES.

3.1 COMPETENCIA.

Por disposición del artículo 321 del CGP, el recurso de apelación contra autos procede solamente en contra de aquellos que la misma norma relaciona o que precisan disposiciones especiales, entre estas últimas se encuentra el proveído atacado, concretamente, en el numeral 3 del artículo 446.

Para resolver, dispone el artículo 328 de la misma obra que, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio, el superior debe limitar su análisis a las razones de inconformidad expuestas por el recurrente.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO.

Le corresponde a la Sala determinar si el *a quo* erró al modificar la liquidación del crédito formulada por la demandante, considerando que los intereses no fueron objeto del mandamiento de pago ni de la providencia que dispuso seguir adelante la ejecución.

3.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

El artículo 424 del CGP, en su momento el 491 del CPC, referente a la ejecución por sumas de dinero, dispone que la demanda podrá versar sobre la suma líquida de dinero más los intereses desde que se hicieron exigibles, hasta que el pago se efectuó.

El artículo 430, en su momento 497 del CPC, en armonía con los respectivos artículos anteriores, determinan que, una vez verificados los requisitos formales del título y la demanda, el juez librará mandamiento ejecutivo en la forma pedida por el demandante o en la forma que considere legal.

Realizado el requerimiento ejecutivo y notificado el demandado y vencido el término sin que pague la obligación demandada, ni formule excepciones, o cuando habiéndolas formulado resulten imprósperas, el juez debe proceder conforme a lo preceptuado en el artículo 440 del CGP y 444 del CGP, en su momento el 507 y 516 del CPC, disponiendo que se siga la ejecución para el cumplimiento de las

obligaciones determinadas en el mandamiento de pago y ordenará que se practique la liquidación del crédito, la cual, una vez vencido el término de ejecutoria, podrá ser presentada por cualquiera de las partes especificando el capital y los intereses de acuerdo al mandamiento ejecutivo (artículos 446 CGP y 521 CPC).

En todo caso, tanto el auto o sentencia que ordene seguir adelante la ejecución como la liquidación del crédito, guardan íntima relación con el mandamiento de pago u orden de apremio al demandado, pues es ésta la que contiene la orden de pagar las obligaciones debidas por la ejecutada.

Liquidación del crédito en el proceso ejecutivo (normatividad y jurisprudencia).

El artículo 446 del CGP establece las reglas a las que se sujeta la liquidación del crédito del proceso ejecutivo. De conformidad con el numeral primero de la norma, la liquidación del crédito podrá ser presentada por cualquiera de las partes a partir de la ejecutoria de la providencia que ordene seguir adelante la ejecución y en ella se ha de especificar el capital y los intereses causados hasta la fecha de presentación.

Dicha liquidación busca establecer el monto actual de la deuda, supone la existencia de un mandamiento de pago y de una providencia que ordene seguir adelante con el mismo. Así, en palabras de la Corte Constitucional, para el momento en que debe presentarse la liquidación del crédito:

“(i) ya se ha proferido un mandamiento de pago en el que se ha señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en firme que decide en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento desde cuando se hizo exigible; y (iii) también está plenamente establecido el monto de la deuda en la unidad monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Así las cosas, las operaciones que restan para liquidar el crédito son la determinación del monto a pagar en moneda nacional, si es el caso, y el cálculo del valor de los intereses, que se establece a partir del tiempo transcurrido desde que la obligación se hizo exigible, cosa que viene señalada en la sentencia, y la tasa aplicable según los diferentes periodos, asunto que cada seis meses es determinado por la Superintendencia Financiera.”¹

¹ Corte Constitucional, sentencia C-814 de 2009.

Una vez presentada la liquidación del crédito por cualquiera de las partes en el momento procesal antes precisado, se corre traslado a las partes por el término de tres días², quienes podrán *formular objeciones relativas al estado de cuenta*, aportando liquidación alternativa en la que se precisen los errores de la objetada.

Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela, precisó que la liquidación del crédito no es el medio idóneo, ni corresponde a la etapa procesal adecuada para discutir nuevamente el valor de la obligación a cargo del demandado:

*"De lo anterior se colige entonces, que la liquidación del crédito es una etapa dentro del proceso ejecutivo, en la que las partes o el juzgador natural tienen la facultad de ajustar la obligación previamente determinada en el mandamiento de pago y en la providencia que ordena seguir adelante con la ejecución, lo que se traduce en que en ese estadio del juicio, ni los contendientes ni la autoridad judicial pueden nuevamente debatir las condiciones del monto del crédito, pues esa labor se agota al resolver las excepciones de mérito en la respectiva sentencia. De manera que, la liquidación del crédito debe ceñirse a lo dispuesto en la orden de apremio y en la sentencia, ya que de otro modo el proceso ejecutivo se convertiría en un escenario aeternum para discutir el quantum de la obligación objeto de recaudo."*³

En suma, la discusión acerca de las "*condiciones del monto del crédito*", deben ventilarse cuando se libra la orden de apremio al demandado y a través de los recursos contra el auto que libra mandamiento de pago o, a lo sumo vía apelación de la sentencia, mas no al momento de establecer las cuentas de la obligación. En tales condiciones, el juez instructor de la causa, no tiene otro camino que el de tomar los correctivos necesarios para ajustar la liquidación a lo decidido, conforme se lo atribuye la norma procesal que, para el caso puntual, lo faculta para modificar la liquidación del crédito.

3.4 CASO EN CONCRETO.

En el caso bajo estudio, se aprecia que el ejecutante, al formular sus pretensiones en la demanda, lo hizo sobre el capital adeudado de

² Art. 446 #2 CGP.

³ Sentencia STC11123-2016 del 12 Agosto 2016

\$115'000.000, más los intereses moratorios⁴; que, sin embargo, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín, a través de providencia del 23 de noviembre de 2007, solo libró mandamiento ejecutivo por el valor del capital adeudado y se abstuvo de ordenar el apremio por los intereses de mora⁵, decisión que no fue controvertida en forma alguna por el demandante

Además, que por decisión del 31 de marzo de 2011, la Sala Octava de esta colegiatura, resolviendo la apelación contra sentencia de primera instancia del 19 de junio de 2009, dispuso continuar la ejecución *"tal como se dispuso en el mandamiento de pago"*⁶, practicar la liquidación del crédito, el avalúo y remate de los bienes embargados y; que el demandante pretendió reabrir la discusión sobre los intereses moratorios, antes de que se siguiera la ejecución⁷ y con posterioridad al fallo de segunda instancia⁸, sin embargo tales pedimentos resultaron infructuosos, por cuanto, tanto el a quo como el Tribunal determinaron que la discusión sobre los intereses moratorios se zanjó en el mandamiento de pago.

Ahora bien, al estudiar la liquidación del crédito que nos ocupa fechada del 18 de mayo de 2022, se tiene que el apoderado de la demandante tazó el estado de cuenta en un total de \$544'901.446; discriminando la obligación en un saldo de capital de \$115'000.00 y un monto de intereses de mora a tasa variable efectiva anual que consolidó en \$429'901.466,66⁹.

En tal sentido, es claro que, los intereses liquidados por el demandante en memorial del 18 de mayo de 2022, no fueron objeto de la orden ejecutiva emanada del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín el 23 de noviembre de 2007 y que tal decisión no fue objeto de reproche por el ejecutante en el momento procesal oportuno pues, conforme al artículo 351, *num.* 4, del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época, hubiese podido interponer el correspondiente recurso de apelación contra el auto que negó parcialmente la orden de apremio, no obstante, tal circunstancia no fue objetada¹⁰.

⁴ Ver expediente, Cuaderno 01 Principal, documento 05001033100620070048200_C001(001), pág. 22

⁵ *Ibidem*, pág. 27

⁶ Ver expediente, Cuaderno 01 Principal, documento 05001033100620070048200_C002(001).pdf, pág. 40.

⁷ Ver expediente, Cuaderno 01 Principal, documento 05001033100620070048200_C001(003).pdf, pág. 10

⁸ *Ibidem* 05001033100620070048200_C001(004).pdf, pág. 17

⁹ Ver expediente, Cuaderno 02 Ejecución, C04 Sentencias, documento 01 Memorial Liquidación Crédito

¹⁰ 05001033100620070048200_C002(001).pdf, pág. 10 y ss.

Así las cosas, se advierte que el recurso de alzada impetrado por el ejecutante en la presente causa, no tiene vocación de prosperidad. ello, pues, como se advirtió en el fundamento normativo y jurisprudencial expuesto, la liquidación del crédito no es la oportunidad para reabrir la discusión respecto del quantum de la obligación a cargo del ejecutado, cuando dicha discusión se debió surtir como recurso ante el mandamiento de pago o contra la sentencia, lo que no ocurrió. Tales oportunidades fueron desechadas por la sociedad apelante para manifestar su inconformidad respecto de los intereses moratorios, luego, lo que correspondía era ajustar el estado de cuenta presentado, al mandamiento de pago en la que se libró la orden ejecutiva por el capital y no por concepto de intereses de mora.

Ahora bien, en su apelación, la demandante sostuvo que debió impartirse la aprobación de la liquidación de crédito presentada, porque la obligación del demandado de pagar el capital pervive íntegramente y no resulta plausible que en tanto tiempo no perciba rédito alguno por los intereses o frutos que genera la obligación principal y; que contrario a lo que estimó el juez de ejecución, el concepto de intereses no correspondían a la moratoria, sino al interés legal como indemnización por la mora, cuya tasa es del 6% y que puede ser reconocida por el juzgador, sin que se haya pactado por los intervinientes.

Las aseveraciones anteriores no son de recibo por esta judicatura pues, como ya se expuso, estando en firme el mandamiento de pago y la sentencia que constituye cosa juzgada, no pueden introducirse en un trámite ulterior, obligaciones nuevas o reabrir discusiones que no fueron reconocidas en la orden ejecutiva.

Llama la atención que, aunque el apelante en la liquidación del crédito omitió precisar claramente a qué tipo de interés hace referencia, en el recurso de alzada dice que se refiere al interés legal. Se aprecia de manera diáfana que en la relación de intereses plasmó una tasa variable mes a mes, por lo que es claro que liquidó por este concepto y no por intereses legales como lo argumentó en la alzada.

En conclusión, la providencia objeto de censura, proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Medellín el 11 de julio de 2022, mediante la cual, modificó la liquidación del crédito, presentada por el demandante el 18 de mayo de 2022 resulta ajustada a derecho, por lo que se confirmara, sin condena en costas al apelante.

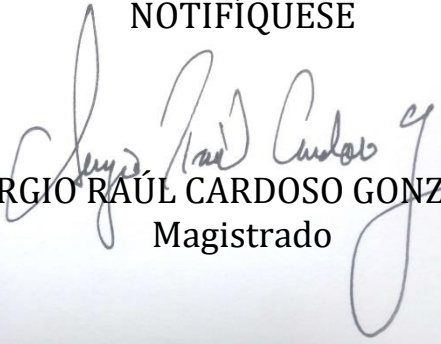
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,

4. RESUELVE.

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión impugnada, se condena en costas.

SEGUNDO: REMITIR el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
Magistrado